

## Crisis de la Educación Superior Pública en Chile

Las recientes informaciones sobre despidos de trabajadoras y de trabajadores de la Universidad de la Frontera y el déficit financiero de otras universidades públicas y privadas, demuestran de manera dramática que la educación superior en Chile se encuentra en una crisis derivada en gran medida de un modelo de financiamiento basado en una lógica mercantil que dificulta el cumplimiento de la función pública que las instituciones de formación técnica y universitaria deben cumplir. Esto afecta también a las universidades del estado que han sido abandonadas y obligadas a autofinanciarse y competir en el mercado como si fueran entes privados, pese a tener mandatos explícitos y sistemas de administración y control de carácter público. El estado no puede seguir desentendiéndose de asegurar el financiamiento de las instituciones de educación superior que son patrimonio de todos los chilenos y todas las chilenas.

Las universidades públicas tienen un rol fundamental, pues garantizan el pluralismo y la formación ciudadana sin sesgos confesionales o de grupos particulares. Pese a la desarticulación y la intervención que se produjo durante la dictadura y el abandono por parte del Estado, las universidades estatales siguen contribuyendo de manera fundamental al desarrollo del país y tienen estándares de control de gestión y democracia interna que no están presentes en las universidades privadas. Sin embargo, por la lógica de una engañosa autonomía administrativa dependiente del autofinanciamiento, las trabajadoras y los trabajadores, académicas y académicos, profesionales, técnicas y técnicos, personal en general, somos empleados públicos y empleadas públicas que no tenemos los mismos derechos que quienes trabajan en otras instituciones del Estado. Esto se refleja, por ejemplo, en no recibir el mismo monto de reajuste anual en los términos que pacta el ministerio de hacienda con la mesa del sector público cada año. Además, significa la carencia de una adecuada carrera funcionaria y de una escala de sueldos asegurada en el presupuesto de la nación.

Solidarizamos con los trabajadores despedidos y las trabajadoras despedidas y hacemos un llamado tanto a las autoridades universitarias como al gobierno central y regional a hacerse cargo de la situación y garantizar el derecho al trabajo de los empleados desvinculados y de las empleadas desvinculadas. Del mismo modo, exigimos que los y las representantes de todos los sectores políticos, en el congreso y el gobierno, se comprometan con generar un mecanismo que ponga fin al autofinanciamiento de las instituciones de educación superior de carácter estatal.